

**Benito Juárez**

***Documentos,  
Discursos y Correspondencia***

**Tomo 13, capítulo CCLXXI**

Selección y notas de  
**Jorge L. Tamayo**

Edición digital coordinada por  
**Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva**

Tomo revisado y anotado por  
**Jaime Olveda**

Versión electrónica para su consulta  
**Aurelio López López**



**Año 2006**

# **Tomo 13, capítulo CCLXXI**

**Anotado y revisado por  
Jaime Olveda  
(El Colegio de Jalisco)**

## **Capítulo CCLXXI**

### **Problemas políticos y jurídicos en la Suprema Corte de Justicia**

**Junio y julio de 1868**

## **CAPÍTULO CCLXXI**

### **PROBLEMAS POLÍTICOS Y JURÍDICOS EN LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA**

**Junio y julio de 1868**

De acuerdo con lo dispuesto por el Congreso respecto al presidente y a los ministros de la Corte que sustituirían a Jesús González Ortega, Manuel Ruiz y Juan J. de la Garza, el día 4 de junio rindieron su protesta, ante el Congreso, Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de la Corte; Pedro Ogazón y Pedro Ordaz como ministros.

Previamente el Sr. Lerdo de Tejada había abandonado la secretaría de Relaciones, quedando al frente de ella el Sr. Manuel Azpíroz.

Considerando conveniente seguir utilizando los servicios de Lerdo de Tejada en el ministerio de Relaciones, en comunicación del 5 de junio, firmada por Azpíroz, oficial mayor del ministerio de Relaciones, se solicita de la Suprema Corte se le conceda licencia para que, dejando temporalmente sus funciones en la Corte, pueda desempeñar el cargo de ministro de Relaciones.

La petición llegó ese mismo día, casi cuando la Corte terminaba su acuerdo diario, sin embargo se le dio curso de inmediato.

Después de un breve debate, se puso a votación con el resultado siguiente: conformes en que se otorgara la licencia: los ministros José García Ramírez, Mariano Zavala, Luis Velázquez, José María Lafragua y Pedro Ordaz; porque se negara: los ministros Pedro Ogazón, Joaquín Cardoso, Vicente Riva Palacio, Simón Guzmán, José María Castillo Velasco, el fiscal Ignacio Altamirano y el procurador general León Guzmán. Cinco por la afirmativa y siete por la negativa.

Ese mismo día, con gran premura, se dio a conocer al Ejecutivo la decisión tomada, lo que al hacerse público "produjo gran sensación en todos los círculos políticos".

El acontecimiento realmente tenía honda trascendencia política y obsérvese que, excepto el ministro Ogazón, los votantes por la negativa a la licencia eran enemigos políticos del gobierno y de Juárez.

La Corte tenía facultades para negar la licencia, y podía fundamentarse la decisión en razones de conveniencia pública, pero generalmente se consideró como una maniobra de carácter político para debilitar al gobierno de Juárez y dar un golpe a Sebastián Lerdo de Tejada. Fue pues un gran acontecimiento político que, como examinaremos más adelante, trajo repercusiones importantes en cadena.

Por ello nos ha parecido ilustrativo para el lector reproducir en seguida la mayor parte de la gacetilla que el bien informado periódico de la época, *El Siglo Diez y Nueve*, publicó al día siguiente:

Al acuerdo de la Corte se dan muy diferentes interpretaciones. Hay quienes crean que lo dictó la consideración política de que el funcionario llamado a ejercer el Ejecutivo, por falta del Presidente, no debe tener parte en los actos de este último, para no comprometer su responsabilidad. Hay quienes digan que la Corte ha querido reprobear la política del jefe del gabinete y provocar una crisis ministerial.

En cuanto al voto del Sr. magistrado Ogazón, se explica, por algunos, fundándose en razones de delicadeza personal, porque si el Sr. Lerdo continuara en el gabinete, el Sr. Ogazón quedaría ejerciendo la presidencia de la Corte y disfrutaría de un aumento de dos mil pesos de sueldo.

*El Globo* aplaude el acuerdo de la Corte, y lo considera como una reprobación de la política del gabinete, pero pone en duda que sobrevenga una crisis ministerial.

*El Monitor* anuncia la denegación de la licencia bajo el título de "Caída del ministerio Lerdo" y refiere que, al discutirse el negocio en la Corte, uno de los magistrados dijo: «La Providencia

o la casualidad ha puesto en nuestras manos la calificación indirecta de la política del país, y esa política es falsa, es débil, es funesta bajo todos aspectos. En nuestra esfera, y conforme a nuestras atribuciones legales, podemos señalar el obstáculo que convierte en infecunda la victoria de México y divide al gran partido liberal.»

*El Monitor* se muestra muy satisfecho de lo sucedido y excita al Presidente a que nombre nuevo ministerio de acuerdo con la inspiración de la opinión pública, y aconsejándose para ello de su digno ministro Vallarín, único que merece la confianza del partido constitucional. Este artículo del *Monitor* está firmado por el Sr. don Guillermo Prieto.

El mismo colega anuncia que el Sr. Martínez de Castro, después de las ocurrencias de ayer, ha resuelto no volver al ministerio.

La *Constitución Social*, sin ningún comentario, da la noticia al ministerio.

La *Opinión Nacional* cuenta lo sucedido y espera proporcionarse buenos informes antes de emitir su juicio.

Los otros diarios dan la noticia sin comentarios.

No puede negarse que el incidente de ayer es demasiado grave, y que en realidad vienen a coartar la libre facultad del Presidente de elegir a los miembros del gabinete.

También es grave que el Poder Judicial intervenga en la política, ya sea mezclándose en cuestiones prácticas o bien resolviendo cuestiones puramente abstractas.

Pero como de hecho la libertad de elegir ministros, tratándose de diputados o magistrados, tiene la taxativa de la licencia del Congreso o de la Corte, nadie puede decir que en esta vez la Suprema Corte de Justicia haya traspasado sus atribuciones ni obrado fuera de su derecho.

Comprendemos muy bien que la separación forzada del Sr. Lerdo debe ser en extremo penosa para el Sr. Presidente de la República, quien en los momentos más críticos, más peligrosos y

más solemnes, ha contado con el patriotismo y con la abnegación de su ministro de relaciones. Pero mientras los hechos no salgan del orden legal, hay que aceptarlos y que acomodarse a ellos.

No creemos prudente que se insista en obtener la licencia para el Sr. Lerdo, porque de este paso sólo resultaría un desaire al Ejecutivo.

Recordamos que cuando hace algún tiempo el Congreso negó licencia al Sr. diputado Berdusco para entrar en el ministerio de Hacienda, aunque se hirió la prerrogativa presidencial, el Sr. Juárez tuvo calma y prudencia para buscar otro ministro.

En la situación presente, cuando es urgentísimo restablecer la paz y reorganizar la administración pública, de ninguna manera conviene que se paralice la marcha del gobierno, ni que se susciten dificultades que entorpezcan su acción.

La responsabilidad moral de un cambio de ministerio no pesa sobre el Presidente de la República. Esta consideración debe decidirlo a proceder a organizar un nuevo gabinete, cuyo programa debe ser el estricto cumplimiento de la ley y la unión del partido liberal.

En cuanto al Sr. Lerdo de Tejada, que queda en el segundo puesto de la República, nada hay en las últimas ocurrencias que empañe sus grandes méritos ni que haga olvidar los distinguidos servicios que ha prestado a su patria en una época de prueba, en que el hombre de estado necesitaba algo más que talento y habilidad para perseverar en el cumplimiento de su deber.

El Sr. Presidente de la República está en el caso de allanar toda dificultad, y de no detenerse en la obra de la reorganización del país. Los antecedentes de su vida pública, toda de abnegación y de desprendimiento, son una garantía de que en el presente ha de tener la prudencia y el tacto indispensables para seguir gobernando conforme a la Constitución y de acuerdo con la opinión pública.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> "La Suprema Corte y el Ministerio", *El Siglo Diez y Nueve*, México, 6 de junio de

En los siguientes días corrieron las más encontradas versiones respecto a si el Presidente Juárez se conformaría con la negativa o insistiría en pedir la licencia del Sr. Lerdo de Tejada, pero se consideraba que esto último sería infructuoso.

Se rumoró que los ministros habían renunciado en su totalidad; pero de ello sólo era cierto que Antonio Martínez de Castro, por razón de salud, había presentado en forma definitiva su renuncia y, ante su insistencia, se le aceptó el 16 de junio y se nombró en su lugar a Ignacio Mariscal como ministro de Justicia e Instrucción Pública.

La situación política era tensa, Juárez no designaba a otra persona ministro de Relaciones, pero tampoco insistía oficialmente ante la Corte, respecto a la licencia solicitada para Lerdo.

El 21 de junio, Francisco Zarco publicó un magnífico editorial examinando el problema en un plan de altura y que se reproduce íntegro como uno de los documentos de este capítulo. Acepta que no es conveniente que el presidente de la Suprema Corte de Justicia y de hecho vicepresidente, pues constitucionalmente sustituiría al Presidente en caso de vacante, participe de la responsabilidad política del Ejecutivo siendo ministro. Concluye señalando: "Cuestión es ésta que merece maduro estudio, sin pasión y sin ira, y que habrá que resolverse: o alejando al Presidente de la Corte de toda participación en el gobierno o estableciendo el modo de remplazar en el poder al Presidente de la República y al sustituto que le da la Constitución."

Por lo que hace al problema concreto que ha producido la crisis, que lleva ya dos semanas, considera: "En el presente caso somos del mismo parecer —se refiere a otras opiniones suyas anteriores— y creemos que la Suprema Corte sólo debe atender a si la ausencia de alguno de sus miembros la imposibilita para ejercer sus funciones, sin mezclarse en cuestiones políticas, ni dar tampoco votos de censura que son enteramente ajenos a sus atribuciones."



La crisis política subsistió varios meses y Lerdo desempeñó el puesto de Presidente de la Suprema Corte durante junio, julio y agosto.

El 1º de septiembre el ministro de Gobernación, Luis Vallarta, presentó su renuncia, haciendo referencia a que se le había señalado como el instigador de la actuación de la Corte negando la licencia a Lerdo; tampoco está de acuerdo con la absolución a Gómez Cuervo, acordada por la misma Corte. El texto de la renuncia, de claro y elegante estilo, concluye apuntando la sospecha de que Juárez ya no le dispensa su confianza.

Al día siguiente el Presidente da respuesta a su comunicación, aceptando la renuncia; pasa por alto sin comentar los problemas políticos y se explaya en negar que haya modificado su juicio sobre él; como hombre público y en lo personal le sigue mereciendo confianza. Ambos documentos forman parte de este capítulo.

Acaso alarmados algunos miembros de la Corte por la prolongada crisis política que debilitaba al gobierno, sobre todo con la renuncia del ministro de Gobernación, y ante una nueva solicitud del Ejecutivo, resolvió conceder la licencia a Lerdo de Tejada para desempeñar el cargo de ministro de Relaciones.

Este acuerdo se tomó en reunión de la Corte de 9 de septiembre. Votaron a favor de conceder la licencia los ministros José García Ramírez, Mariano Zavala, Luis Velázquez, José María Lafragua, Pedro Ordaz; modificaron su anterior posición, votando ahora a favor de la licencia, Vicente Riva Palacio y José María Castillo Velasco.

Sostuvieron su posición en contra a la concesión de la licencia Joaquín Cardoso, Simón Guzmán, el fiscal Ignacio Altamirano y el procurador general León Guzmán. El ministro Pedro Ogazón no asistió a la junta.

Resultó, por lo tanto, una mayoría a favor de la licencia, la que se concedió ocupando la presidencia provisional, por ser el ministro número 1, Pedro Ogazón.

El ministro Castillo Velasco consideró conveniente presentar por escrito la justificación de su cambio de voto, misma que se reproduce en

el presente capítulo por considerarla de interés para conocer las razones de las personas de la oposición.

León Guzmán, a su vez, quiso dejar constancia de la razón en que fundaba su negativa. Pensamos que su argumento no es de peso, toda vez que podían, circunstancias imprevistas, justificar que el presidente de la Corte designado por el pueblo dejara el cargo y reforzara al Ejecutivo en un momento de crisis política.

Veamos ahora otro enojoso incidente provocado por la actitud hostil de la mayoría de los miembros de la Suprema Corte de Justicia, respecto a Juárez:

En su afán de restablecer lo más pronto posible la normalidad en todas las ramas de la administración, el ministro de Guerra, Ignacio Mejía, previa consulta al ministro de Justicia, Martínez de Castro, dio a conocer el 7 de mayo una circular señalando que la Suprema Corte de Justicia actuará como tribunal de segunda instancia para las causas militares.

La circular, que reproduce la opinión de Martínez de Castro, reconoce que por omisión no está expresamente señalada esa función a la Suprema Corte de Justicia pero, por una serie de razonamientos, llega a la conclusión de que debe asumirla. Reproducimos a continuación el párrafo final de la circular en que se resume esta cuestión:

Por otra parte, hay muy graves consideraciones que fundan la competencia de la Suprema Corte de Justicia, para conocer de las causas militares. Siendo los delitos objeto de esas causas de los que comprometen muchas veces la paz pública y la seguridad del estado, su represión es de lo más urgente. Ahora bien, si las leyes referidas no son bastantes para considerar a la Corte de Justicia como tribunal competente para juzgar de esos delitos, menos servirán para declarar la competencia de cualesquiera otros tribunales; y en tal caso, no podrían castigarse esos delitos, con grave perjuicio de la sociedad. Para evitarlo no quedaría más recurso que acudir a la Suprema Corte, no ya como tribunal militar, sino como ordinario, y cuya jurisdicción, como fuente y

origen de todas las demás, es indispensable para conocer en todos los delitos que afecten a la federación."<sup>2</sup>

La Corte examinó esta cuestión y la turnó al fiscal, Ignacio Manuel Altamirano, quien emitió la tajante y lacónica conclusión: "La Suprema Corte de Justicia no es competente para conocer en las segundas instancias de las causas militares."

Puesta a consideración del pleno de la Corte o del acuerdo, como se decía entonces, se provocó una violenta y acalorada discusión en que los reposados ministros perdieron los estribos y se enfrascaron en un debate, aflorando la pasión política de algunos que utilizaron este incidente para atacar al Ejecutivo, representado por Juárez, y hostilizar al presidente de la Corte, Lerdo de Tejada. La proposición fue aceptada y se le comunicó al ministro de Justicia el 15 de julio.

Incluimos en este capítulo la crónica de dos de las reuniones de la Corte, escrita con malicia y no poco de buen humor por Guillermo Prieto.

Una vez más se enfrentaron Sebastián Lerdo de Tejada y León Guzmán. Este último en violenta discusión empleó precisamente las mismas expresiones que en septiembre anterior había escrito sobre el problema de la convocatoria: "Yo no autorizo, ni reconozco facultad en el Sr. Lerdo para que interprete, ni comente, ni deduzca nada de mi dicho".

El gobierno, empeñado en resolver este espinoso problema precisamente para dar garantías a los acusados, tuvo que buscar una nueva solución. Ahora el ministro de justicia, Ignacio Mariscal, en acucioso y elegante estudio resuelve que los Tribunales de Circuito son competentes para intervenir en la segunda instancia de los juicios militares.

Ignacio Mariscal da a conocer a los jueces de distrito este estudio en forma de circular; el lector puede observar cómo la pasión política nubló la mente de algunos austeros magistrados, que hicieron a un lado la

---

<sup>2</sup> Dublán y Lozano, *Legislación mexicana*, pp.318 y 319.

cordura y los textos de consulta del derecho, en su afán de poner piedras en el camino de una administración que trataba de reconstruir a la nación.

Otro nuevo incidente, si bien éste de mayor altura, se presentó al actuar la Suprema Corte como gran jurado de sentencia, en el caso del gobernador Gómez Cuervo.

En páginas anteriores dijimos que había sido absuelto, lo que ocurrió de hecho, y ésta fue la impresión general en esos días, pese a los circunloquios de que hizo uso este cuerpo para emitir su fallo.

La Corte, el 22 de agosto, después de amplia discusión, resolvió que "se da por compurgado al Sr. Gómez Cuervo con el tiempo que lleva de suspensión de su encargo y demás padecimientos sufridos. En consecuencia, quedará en absoluta libertad y repuesto en su cargo de gobernador constitucional del estado de Jalisco".

Una vez más el combativo y bien informado abogado León Guzmán, en sus funciones de procurador general, se opone y fundamenta por escrito su parecer. Según su opinión debióse declarar de que "no hay ley que imponga pena para el delito de que es culpable"... "que, en virtud de ese hecho, es imposible pronunciar sentencia".

En su texto hace enérgicas censuras a Gómez Cuervo, llama al motivo del proceso "asesinato, porque suponiendo a esos hombres los más culpables del mundo, la verdad es que no eran criminales ante la ley".

León Guzmán estaba en la oposición al gobierno de Juárez, pero en éste y otros casos que señalaremos, fue consecuente con su posición de jurista honesto y capaz. Dijo y actuó conforme a su verdad.

El acta del acuerdo de la Corte y el voto razonado de León Guzmán, se reproducen como documentos de este interesante y singular capítulo.

## ZARCO OPINA SOBRE LA ACTITUD DE LA CORTE EN EL CASO DE LERDO DE TEJADA

### Las cuestiones del día

Hace ya más de dos semanas que un incidente inesperado ha venido a causar serias perturbaciones en las regiones oficiales y a paralizar la marcha de la administración, en un período en que debe consagrar sus afanes y sus esfuerzos a la empresa de reorganizar ramos importantes y de plantear las innovaciones decretadas por el Congreso de las leyes de presupuestos y de clasificación de rentas.

Habrán comprendido nuestros lectores que aludimos al hecho de haber negado la Corte de Justicia a su presidente el Sr. don Sebastián Lerdo de Tejada el permiso que necesitaba para continuar siendo ministro de Relaciones Exteriores.

Fuimos los primeros en anunciar este suceso y en comentarlo, emitiendo las reflexiones que nos sugirieron las circunstancias del momento, los rumores que se pusieron en circulación, nuestro afán por el bien público y nuestro deseo sincero de que el gobierno tenga todo el prestigio y toda la respetabilidad que necesita para llevar a cabo sin tardanza, no sólo la pacificación, sino la reorganización administrativa de la República.

Creemos oportuno recordar que siempre hemos defendido, en la prensa y en la tribuna, la libre prerrogativa del jefe del Ejecutivo para nombrar su gabinete y hemos sostenido que el Congreso, al dar licencia a sus miembros para ser ministros, resuelve la cuestión económica de si le hacen falta para las sesiones sin avanzar a dar votos de confianza o votos de censura, que tiene ocasión de pronunciar sin invadir la libre prerrogativa del Presidente.

En el caso presente somos del mismo parecer, y creemos que la Suprema Corte sólo debe atender a si la ausencia de alguno de sus

miembros la imposibilita para ejercer sus funciones, sin mezclarse en cuestiones políticas, ni dar tampoco votos de censura que son enteramente ajenos de sus atribuciones.

Pero sea como fuere, el hecho es que el Congreso y la Corte pueden, sin traspasar la ley, sin faltar a sus deberes y sin convertirse en entidades revolucionarias, negar a sus miembros la licencia para ser ministros, resultando de aquí que la facultad del Presidente, de nombrar ministros, puede tener a veces taxativas que están dentro de la ley, y que por lo mismo deben aceptarse con resignación como cualesquiera otras restricciones de las facultades del poder. Que existan estas taxativas, será más o menos conveniente, más o menos acertado, más o menos conforme con la buena práctica del sistema representativo; pero por ahora lo que conviene establecer es que ellas no son ilegales, ni revolucionarias ni envuelven un ataque al Ejecutivo de parte de los otros poderes.

Más tarde podrá pensarse en si conviene ensanchar la prerrogativa presidencial dejándola libre de toda traba, o si conviene dejarla sujeta a las taxativas que hoy la restringen, pero por hoy hay que aceptar los hechos como enteramente legales, y si ellos suscitan alguna dificultad hay que allanarla con firmeza y serenidad, pensando en que la suerte del país y de su gobierno no deben sacrificarse a incidentes de un orden meramente secundario.

Si el Presidente de la República, para no tener trunco el gobierno, necesita llamar al gabinete a un hombre que no reúna todos los relevantes méritos del ciudadano a quien quería conservar a su lado, debe servirle de consuelo que no será suya exclusivamente la responsabilidad de este acto, sino que recaerá en gran parte sobre la Suprema Corte de Justicia.

La salida del Sr. Lerdo del gabinete, ha producido naturalmente una polémica viva y animada en toda la prensa. Los órganos de la oposición batieron palmas al ver fuera del gobierno al hombre de estado cuya política vienen combatiendo desde agosto, y creyeron que su salida debía producir la de los otros miembros del gabinete identificados con esa política.

Los papeles ministeriales han creído que la política Lerdo debe sobrevivir al Sr. Lerdo en el gabinete, y que por tanto no se necesita de

ninguna modificación. Nosotros, que tenemos la desventaja de una posición neutral, que no estamos filiados en la oposición, ni nos contamos entre los ministeriales *cuand meme*, hemos contemplado imparcial y fríamente los acontecimientos y, sin aplaudirlos ni deplorarlos, hemos creído que debían producir una reorganización completa del ministerio.

En esta divergencia de opiniones, se han suscitado cuestiones de alguna gravedad sobre si bajo nuestro sistema de gobierno hay o no un ministro que sea jefe del gabinete, sobre si este papel corresponde o no al Presidente, sobre si es legal que los ministerios, al constituirse, formulen un programa y sobre cuáles son las causas que deben producir modificaciones parciales o crisis totales en los gabinetes. Puntos son estos de que alguna vez nos hemos ocupado y que no pueden resolverse por el sentido literal de la Constitución, ni de ninguna ley secundaria, sino por las costumbres políticas, por los hábitos parlamentarios y aun por razones de delicadeza personal.

Cierto es que, según la Constitución, no hay Presidente del consejo de ministros, y que todos los secretarios de estado son iguales en rango y en categoría. Pero es evidente, que para que la administración marche de una manera regular es preciso que el Presidente forme ministerios con hombres que profesen los mismos principios políticos, que tengan las mismas ideas y los mismos propósitos y de aquí viene la necesidad de encomendar, a alguna notabilidad prominente en un partido, la formación de un ministerio. Es claro que en esta elección, el llamado a distribuir las carteras obra de acuerdo con el Presidente, pero es también cierto e inevitable que quien ha formado un ministerio queda como su jefe, lo que no quiere decir que dé órdenes a sus colegas, sino que sus opiniones y su política predominen en las resoluciones del gobierno. De aquí se infiere que, cuando cae el jefe de un ministerio, sus compañeros deben caer también, aunque no sea más que para dejar al Presidente en completa libertad para cambiar de política y buscar otros consejeros. Que así suceda, parecen aconsejarlo razones de conveniencia pública y también consideraciones de delicadeza personal.

El jefe del Ejecutivo está guarecido por la responsabilidad ministerial, y este artificio legal de dejar libre al Presidente de la culpa que pueda haber en actos acordados por él sólo puede sostenerse cuando un ministro tiene el carácter de jefe del gabinete. Este artificio ofrece la ventaja de que la opinión pública pueda influir en el gobierno y hacerlo cambiar de rumbo sin necesidad de trastornos.

No sería, pues, acertado que el jefe del Ejecutivo fuera lo que es en las monarquías el presidente del consejo, porque entonces su responsabilidad se comprometería a cada paso, y no habría el ventajoso expediente de resolver de una manera pacífica y por medio de crisis ministeriales, las dificultades con que tropiezan los gobiernos que tienen el deber de tomar por guía las inspiraciones de la opinión pública.

Siempre hemos creído conveniente que los hombres públicos formulen un programa al aspirar a los cargos que confiere el pueblo, o al entrar al poder, y no hemos hallado en esto nada revolucionario ni nada monárquico. No creemos que basta decir que se cumplirá con la Constitución, porque en todas épocas hay cuestiones políticas, sociales y económicas que pueden tener muy distintas soluciones, que quepan todas dentro de la Constitución. En un país en que se están planteando instituciones: nuevas, en una democracia progresista que quiere sacudir las ligaduras de lo pasado y tiene el instinto de grandes innovaciones, siempre ha de estar a la orden del día la cuestión de reforma, y así, no es ocioso, ni superfluo, ni mucho menos monárquico, ni revolucionario, que los ministerios, al constituirse, formulen su programa y digan a dónde van y a dónde quieren llevar a la nación.

Las causas determinantes de cambios parciales o totales en los gabinetes son fáciles de conocer siempre que se comprenda la necesidad que tienen los gobiernos populares de marchar de acuerdo con la opinión. En el sistema autocrático, donde no hay más política que la voluntad de un hombre, los ministros casi no merecen el nombre de funcionarios públicos, pues son agentes personales del autócrata, y suben, y duran y bajan, y vuelven a subir al antojo de su amo y señor. Con ellos, nada tienen que hacer el pueblo ni la opinión pública. El zar se deshace de sus ministros colmándolos de presentes o mandándolos a Siberia. El sultán,



al despedirlos, les confiere un bajalato o les envía el cordón verde, para que ellos mismos pongan fin a su miserable existencia.

En los países libres las cosas pasan de otra manera. Un emperador romano confirió la dignidad de cónsul a su más hermoso caballo de batalla. Los monarcas absolutos pueden hacer ministros a sus ayudas de cámara y a sus lacayos. En las monarquías constitucionales y en las repúblicas no puede llegar a tal grado el extravío del jefe del estado. La prerrogativa de nombrar ministros tiene en los países libres una prerrogativa que no está escrita en la Constitución ni en las leyes; pero que no puede traspasarse impunemente. Esta taxativa es la de la opinión pública que determina la formación de los ministerios e indica oportunamente la necesidad de las crisis parciales o totales.

En el sistema parlamentario los ministerios necesitan del apoyo de la mayoría, y pueden conocer si lo tienen o no cada vez que ejercen el derecho de iniciativa, que opone el veto o que hacen observaciones a los proyectos de ley. Si en cualquiera de estos casos sufren una derrota, la conveniencia pública, la necesidad de conservar la armonía entre los dos poderes, y de que no disminuya el prestigio del gobierno, aconsejan un cambio de ministerio. Este cambio será parcial si la derrota se sufre en un asunto secundario o meramente administrativo, y será total si recae sobre la política del gabinete. La necesidad de estos cambios debe indicarla el decoro personal, cierto sentimiento íntimo que hace conocer al hombre cuando se encuentra en una posición embarazosa o ridícula. Se necesita de cierta ceguera, de cierta torpeza para conservar la cartera después de una derrota parlamentaria, y dan lástima esos ministros desautorizados, sin prestigio, sin palabra, que temen acercarse a la tribuna y no se atreven a hablar en nombre del gobierno presintiendo que han de ser escuchados con desdén. Ninguno debe saber mejor cuándo debe haber crisis ministerial que los mismos ministros, así como ninguno siente mejor la necesidad de cambiar de aires que el que respira miasmas que lo envenenan. El hombre público que sabe retirarse a tiempo, gana en el aprecio de sus conciudadanos y aun puede volver al poder, porque no siempre está la razón del lado de las oposiciones, mientras que quien

espera silbidos y empujones para salir de un ministerio, corre riesgo de quedar universalmente despreciado.

Abandonando esta larga digresión, diremos que hemos creído necesaria la reorganización del gabinete, porque teníamos por cierto que el Sr. Lerdo era jefe del gabinete y que, por lo mismo, al dejar él la cartera, sus compañeros estaban en el caso de presentar sus dimisiones, como lo hizo el Sr. Martínez de Castro. Hemos creído también que por sensible que sea la separación del Sr. Lerdo, no es de ninguna manera conveniente que ella cause la acefalía del gabinete y la paralización de los negocios públicos.

De dos cosas una: o el Sr. Lerdo como jefe del gabinete dirigía la política toda del gobierno y ejercía su influencia en todas las secretarías, o era simplemente ministro de Relaciones Exteriores, sin mezclarse en ningún otro ramo de la administración. En el primer caso es preciso una reorganización completa para que no exista un grupo acéfalo sin plan ni dirección. En el segundo disminuye de un modo muy considerable la gravedad del incidente, y sólo se necesita buscar un nuevo ministro de Relaciones, puesto en que por ahora basta tener algún tino en conservar la armonía con los Estados Unidos y colocarse en actitud meramente expectante respecto de las potencias europeas.

En nuestro concepto, el primer caso que suponemos es el verdadero. Pero séalo o no, insistimos en que no es conveniente que estén vacantes las Secretarías de estado.

No queremos ocuparnos de los absurdos rumores que han corrido en estos quince días, atribuyendo al Presidente resoluciones indignas de su fama y de su buen juicio, de que ha dado tantas pruebas en circunstancias extraordinariamente difíciles. Todos esos rumores quedan desmentidos por el hecho de haberse provisto el ministerio de Justicia que quedó vacante con la renuncia del Sr. Martínez de Castro.

Hemos recordado los honrosos antecedentes del nuevo ministro de Justicia, el Sr. Mariscal, al anunciar su nombramiento, y hemos creído que merece la confianza del partido progresista y que en los ramos, que tiene a su cargo, procurará la mejora y el adelanto. Nos reservamos el derecho de calificar sus actos con la mayor imparcialidad.

No creemos justos, ni fundados, ni razonables, los ataques que alguno de nuestros colegas ha dirigido al Sr. Mariscal antes de que sea conocido uno solo de sus actos. Tampoco es cierta la explicación que el mismo colega da a la entrada del nuevo ministro, atribuyéndola a la afección personal del Presidente y pretendiendo quitar al Sr. Mariscal toda significación política. Muchos ciudadanos han pasado por los ministerios sin ser tan conocidos como lo es el Sr. Mariscal, cuya vida pública no tiene manchas y cuyos antecedentes son una garantía de probidad, de patriotismo y de adhesión a los principios progresistas.

Otra cuestión ha venido a suscitar el nombramiento del Sr. Mariscal, y confesamos francamente que vacilamos al resolverla, sobre todo por la falta de precedentes en qué fundarnos. El artículo 58 de la Constitución previene que los diputados propietarios, desde el día de su elección hasta el día que concluyan su encargo, no puedan aceptar ningún empleo de nombramiento del Ejecutivo de la Unión por el que se disfrute sueldo, sin previa licencia del Congreso.

Ahora bien, el Sr. Mariscal ha sido nombrado ministro uno o dos días después de haber sido electo diputado propietario por uno de los distritos de esta capital, ha aceptado su nombramiento, y está desempeñando sus funciones, de manera que se ha faltado al artículo 58 de la Constitución. Pero ¿puede cumplirse con este artículo estando el Congreso en receso? ¿Resulta de aquí una nueva taxativa que equivalga a que durante los meses de receso ningún diputado pueda ser llamado al gabinete? Si estas cuestiones se resuelven en sentido afirmativo, saltan a los ojos gravísimas dificultades.

El Congreso, conforme a la Constitución, sólo debe estar reunido del 16 de septiembre al 15 de diciembre, y del 1° de abril al último de mayo, con la circunstancia de que este segundo período es improrrogable. Por tanto debe estar en receso en los meses de enero, febrero, marzo, junio, julio y agosto, y además en la primera quincena de septiembre y en la segunda de diciembre. En todo este tiempo bien pueden sobrevenir crisis ministeriales y sería absurdo suponer que la Constitución quiso privar al Presidente de la facultad de nombrar ministros a los diputados. La exclusión de todos los miembros de la

representación nacional sería injustificable y no tendría explicación posible.

Durante el receso desaparece la cuestión económica de las licencias bajo el punto de vista de que falten diputados para completar el *quorum* y así no haciendo falta los representantes para que exista el Poder Legislativo, no parece razonable que si el Ejecutivo cree necesarios sus servicios tenga que privarse de ellos por falta de la formalidad de la licencia, que viene a ser innecesaria, puesto que es para dejar de concurrir a las sesiones y que durante el receso no hay tales sesiones.

Tratándose de individuos de la diputación permanente, que es un cuerpo del estado que en ciertos casos puede ejercer alguna de las atribuciones del Congreso, sin que la Constitución lo prevenga, la práctica ha establecido que el gobierno solicite licencia cuando quiere ocuparlos en cargos de la administración. Así sucedió precisamente en San Luis Potosí cuando el Sr. Lerdo de Tejada, siendo vicepresidente de la diputación permanente, fue llamado al ministerio.

En la diputación permanente existe, como en el Congreso, la cuestión económica de conservar el *quorum*.

Hay quienes crean que procediendo por inducción, y puesto que durante el receso la diputación puede aprobar los nombramientos diplomáticos y militares que haga el Ejecutivo, disponer de la guardia nacional y aun acordar la suspensión de garantías, a ella corresponde la atribución, durante el receso, de conceder licencias a los diputados para poder ser ministros. Esta opinión no es aceptable porque la Constitución cuidó de enumerar las facultades de la diputación permanente, y no hizo mención de aquella de que nos venimos ocupando.

Puede haber en esto una omisión; pero puede también haber habido la consideración de que, durante el receso, los diputados no tienen que asistir a las sesiones y por lo mismo no necesitan licencia para faltar a ellas.

Es un hecho notable que de todos los periódicos que han estado clamando hace quince días por la reorganización completa del gabinete, sólo uno haya hecho mérito de la infracción del artículo 58 de la

Constitución, al entrar el Sr. Mariscal al ministerio y que todos los demás, ni antes ni después de este incidente, se hayan ocupado del asunto. No creemos que haya estado en la mente de nuestros ilustrados colegas, ni que les haya parecido posible que se forme un nuevo ministerio con exclusión absoluta de todos los miembros del Congreso.

A falta de texto constitucional y a falta de precedentes en este o aquel sentido, nos parece oportuno señalar la práctica que se sigue en los Estados Unidos, tratándose de nombramientos sujetos a la aprobación del Senado, entre los que se cuentan los de los miembros del gabinete. Siempre que durante el receso de las cámaras ocurren vacantes en el ministerio, en las legaciones, en los grados altos del ejército, en los empleos superiores de hacienda o en la magistratura, el Presidente, si cree que así conviene al servicio público, hace desde luego nuevos nombramientos, dándoles el carácter de interinos, a reserva de someterlos al Senado, tan luego como vuelva a reunirse. Se procede así para evitar que durante el receso se paralice la administración.

Nosotros creemos que durante los recesos del Congreso, el Presidente puede llamar libremente a los diputados: para desempeñar los ministerios y que las licencias deben solicitarse al abrirse el nuevo período de sesiones. De otro modo sería imposible resolver las crisis ministeriales durante el receso, y se prolongarían las situaciones de acefalía y de marasmo que tan funestas son a la marcha de la administración pública.

Creemos que la dificultad con que tropezó el Ejecutivo, al verse privado de los servicios del Sr. Lerdo de Tejada, es grave, pero no tanto que deba paralizar la marcha del gobierno. Deseamos que no haya carteras vacantes, porque es necesaria la actividad en las esferas administrativas, y porque la experiencia enseña que detenerse es lo mismo que retroceder. Al Presidente toca decidir si ha de cambiar de política, o si ha de continuar la del Sr. Lerdo; sobre su decisión fallará la opinión pública por sus órganos legales.

De toda esta tempestad quedan algunas cuestiones prácticas que sólo con el tiempo podrán resolverse sobre la libre prerrogativa del Presidente para nombrar ministros y sobre la incompatibilidad de ciertos

cargos públicos. Lo más serio, y de lo que menos se ha hablado, es la consideración de si conviene que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia en su calidad de Vicepresidente de la República deba formar parte del gobierno cuando por la Constitución está llamado a remplazar al jefe del Ejecutivo. Esto ofrece inconvenientes mientras no se resuelva cómo deba llenarse la vacante del Presidente de la República y del presidente de la Corte. Suponiendo casos de responsabilidad y enjuiciamientos, es muy difícil que los ministros sean cómplices de los delitos oficiales del Presidente. En tales casos, siendo ministro, el presidente de la Corte quedaría envuelto en la responsabilidad del jefe del Ejecutivo y por tanto inhabilitado para encargarse del poder. De aquí provendrían la acefalía y la destrucción del gobierno, y para atender a estos males, medios extralegales y revolucionarios que por su naturaleza son peligrosísimos y alejan a las sociedades de la consolidación de sus instituciones.

Cuestión es esta que merece maduro estudio, sin pasión y sin ira, y que habrá que resolverse o alejando al presidente de la Corte de toda participación en el gobierno o estableciendo el modo de remplazar en el poder al Presidente de la República y al sustituto que le da la Constitución.

*Francisco Zarco*

## RENUNCIA VALLARTA AL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN

Casa de usted, septiembre 1° de 1868

Sr. Presidente don Benito Juárez

Muy señor mío, de toda mi consideración y aprecio:

Me tomo la libertad de adjuntar a usted el pliego que contiene la renuncia que hago del ministerio que ha estado a mi cargo y, no pudiendo oficialmente ser tan explícito como lo deseo, para dar a conocer a usted las causas que motivan mi resolución, me permito también dirigirle la presente, en la que puedo hablarle con la franqueza que me exigen las consideraciones que le debo.

Cuando la Corte de Justicia negó al Sr. Lerdo su licencia para continuar en el gabinete, la calumnia me escogió a mí para su víctima, asegurando que yo había intrigado para que a este señor se le quitara de su puesto y para sustituirlo yo en él. Esas imputaciones nunca tuvieron por apoyo ni siquiera un indicio fundado, pero fueron bastantes para dar origen a mil versiones que siempre me ofendían. Por la centésima vez protesto contra aquella calumnia y le juro a usted que ningún participio tomé en ese infausto suceso.

Estas imputaciones me hirieron en lo más vivo; quise luego, para destruirlas, protestar contra ellas con hechos, y aunque en unión del Sr. Balcárcel trabajé cuanto pude para que la Corte retirara su primitivo acuerdo, mis trabajos fueron doblemente estériles porque ni la Corte concedió la licencia ni yo obtuve la plena satisfacción que deseaba. No me quedó, entonces, más recurso que renunciar el ministerio, para probar así que no sólo no estaba inspirado por los ambiciosos proyectos que se me atribuían, sino que ni aun quería conservar el puesto que ocupaba a

costa de una sospecha infamante; creí que ante mi renuncia tendría que enmudecer aquella calumnia.

El Sr. Balcárcel, a quien desde aquellos aciagos días comuniqué toda la amargura que me ha hecho probar esa calumnia, supo también la resolución que para combatirla había yo tomado, pero este señor me disuadió de mi propósito probándome que en aquellas circunstancias de agitación, mi renuncia podría complicar una situación ya difícil. Ni entonces ni nunca he querido suscitar dificultades al gobierno; devoré en silencio mi amargura y esperé mejor ocasión para vindicarme.

Creí que el tiempo y mi conducta podrían hacerlo, no ha sido así. Ha habido empeño en mantener vivas las sospechas que en mi contra despertó la maledicencia. Una desgraciada complicación de negocios ha adunado diversos intereses para explotar esas sospechas. Usted sabe bien cuáles son esos negocios y cómo han hablado contra mí esos intereses. Permítame usted que arraigue aquí lo que usted también sabe: ni una sola palabra le he dicho contra mis enemigos. Mejor que parecer inspirado por una pasión innoble, he querido guardar el más completo silencio sobre negocios en los que tenía el deber de hablar; hasta ese extremo he querido ser caballero.

Cuando ni el tiempo ni mi conducta fueron bastantes a vindicarme, volví a mi propósito de renunciar el ministerio. Así lo dije al Sr. Balcárcel en cuya amistad y discreción he buscado alivio y consejo durante estos aciagos últimos meses. Este señor conoce bien la historia de este negocio y la constancia en mi deseo de la renuncia.

Cuando debí haberlo hecho por segunda vez, estaba ocupado en el arreglo de los negocios del presupuesto del ministerio y había también un gran recargo de expedientes por faltas que en la oficina no había podido remediar. No me pareció conveniente dejar a mi sucesor este recargo. Hoy el despacho está en corriente y no existen las circunstancias que en principios de junio me obligaron a permanecer aquí.

Me creo muy feliz dando a usted estas explicaciones de mi conducta y probándole con hechos que ni tuve ni tengo proyectos ambiciosos, que soy leal y agradecido y que en más estimo el aprecio de usted que un destino conservado a costa de una sospecha. Mi renuncia,



señor Presidente, es la satisfacción que doy a usted de mi conducta, en la protesta que le presento contra esa sospecha; quiero mil veces más ser un ciudadano de cuya caballerosidad no se dude, que un ministro contra cuya lealtad baya una sola sospecha.

Nunca dije a usted una palabra sobre todo esto ¿Por qué? Porque imaginé que una explicación verbal que de mi conducta le hiciera podría traducirse como el medio de que yo me valía para obtener de usted una respuesta de atención que diera fin a este negocio. No quise que tal cosa se creyera y hoy, que me separo del ministerio, puedo decir cuanto ha pasado, sin que en mí haya otra intención que la de recuperar su aprecio y confianza, yéndome yo a la vida privada. La primordial y determinante causa de mi renuncia está ya indicada, pero no es esto sólo lo que la motiva. Usted sabe que hay alguna autoridad que no está conforme conmigo y, creyendo que la hostilizo y que nada se hace en palacio de lo que le disgusta, que yo no inspire, trabaja contra mí.

A usted le consta que esa creencia es infundada; pero no queriendo yo mantener conflictos en la administración, pruebo, con mi separación, que en mi conducta pasada no ha habido más que lo que yo he entendido que es el cumplimiento de mi deber.

Otro motivo tengo que, aunque de un carácter confidencial, trasciende también a la cosa pública. He querido ser franco y no puedo ocultar nada de lo que siento. He notado que usted me retiró la confianza que en mí puso. ¡Penosa, pero necesaria confesión! Después de tanto que contra mí se le ha dicho, razón ha tenido usted para dudar de mí... Como particular, deseo con vehemencia reconquistar su aprecio para que usted encuentre en mí siempre al caballero que buscó y no al intrigante ambicioso que pintan mis enemigos; como ministro no puedo, sin grave perjuicio del país, permanecer en un gabinete en que se me desconfía. Mi renuncia satisface a ambas exigencias; ella me libra del peso de sospechas que me avergüenzan, ella hará enmudecer a los intereses que se creen amenazados con mi permanencia en el ministerio y ella, en fin, demostrará a usted que no me he hecho indigno de su aprecio. Si esto consigo, contento volveré a la vida privada.

No ocultaré a usted tampoco que hay otras exigencias de actualidad que hacen necesaria mi renuncia. El fallo que la Corte de Justicia ha pronunciado en el negocio de Jalisco, hace imposible mi permanencia en el ministerio; no puedo aliviar los males de ese Estado y quisiera hasta ignorarlos. Si usted considera cuál es hoy mi situación, se persuadirá de que mi juicio, en este particular, es escueto. Temo las dificultades que sobrevengan en el período próximo de sesiones y, como no puedo evitarlas, quiero y debo dejar mi puesto a persona que sirva mejor que yo. Bajo todos puntos de vista, mi separación es necesaria e inexcusable.

Tengo el propósito de dedicarme al ejercicio de mi profesión aquí; me he impuesto un destierro voluntario del estado de mi residencia, para no ser en él ni testigo, ni ocasión, ni víctima de sus males. Aquí soy desconocido en el foro pero, como no tengo más recursos para vivir que los que mi trabajo me da, voy a luchar con las dificultades de mi establecimiento aquí para subsistir. Me atrevo a suplicarle que para el ejercicio de mi profesión me ayude con su influencia. Después de los favores que le pido de que acepte mi renuncia y me devuelva su estimación, nada le agradeceré más que esa protección que necesito para tener trabajo de qué vivir.

He hablado a usted con toda sinceridad ¿habré conseguido lo que deseo, disponer su ánimo a que me conceda esos favores? Si es así, me creeré muy feliz.

Réstame asegurarle también, en lo particular, mi profunda gratitud por la elección que de mí hizo, protestarle que soy su sincero amigo en lo personal y partidario suyo en lo político porque conozco y aprecio sus virtudes, porque usted es el depositario de la autoridad legítima, porque con sus méritos ante el país no tiene usted rival, porque, en fin, sin usted, hoy nuestra Patria sería devorada por la anarquía. Perdone usted tan larga carta, todo esto necesitaba decir quien se repite su sincero y afectísimo amigo y seguro servidor q. b. s. m.

*Ignacio L. Vallarta*

## PONDERADA Y TRANQUILA RESPUESTA DE JUÁREZ

México, septiembre 2 de 1868

Sr. don Ignacio Vallarín

Mi estimado amigo:

Con la carta de usted recibí ayer la renuncia que hace del ministerio de Gobernación que estaba a su cargo.

Veo los motivos que han impulsado a usted a dar ese paso, que siento, porque era mi deseo que siguiera usted ayudándonos con las luces y laboriosidad en la reorganización de la administración pública; pero, según percibo de las frases de su carta y del oficio de su renuncia, no es fácil que varíe usted de su resolución, en cuyo caso no me queda más arbitrio que acceder, aunque con mucho sentimiento, a su pedido y darle las gracias más expresivas por el empeño y acierto con que procuró llenar las funciones del puesto que estuvo a su cargo.

Entre los motivos que alega usted para hacer su renuncia, aparece el de que yo le había retirado mi confianza. Permítame que le diga que en este aserto padece usted una equivocación, pues a haber sido cierto este hecho, no sólo se lo habría manifestado con franqueza, en el seno de la amistad, sino que habría acordado oficialmente su separación. Es verdad que eran repetidas las circunstancias que circulaban y que llegaban a mí noticias sobre la conducta de usted en los sucesos que me refiere en su carta; pero yo en todo suspendía mi juicio y nunca llegué a persuadirme de que usted obrara de la manera que se decía en el público. Hago a usted esta explicación para que no abrigue el falso concepto que ha usted estampado en su carta.

Me parece bien y muy honroso para usted su determinación de dedicarse al ejercicio de su profesión y yo tendré mucho gusto en ayudar a usted en todo lo que pueda y esté en mi arbitrio para que pueda adquirir una numerosa clientela; pero, si por el servicio público fuere necesario el auxilio de usted, espero que me seguirá prestando su cooperación con la buena voluntad que lo ha hecho hasta ahora.

Soy de usted amigo afectísimo y seguro servidor q. b. s. m.

*Benito Juárez*

## EL MAGISTRADO CASTILLO VELASCO RAZONA SU CAMBIO DE PARECER EN RELACIÓN A LA LICENCIA DE LERDO DE TEJADA

Cuando en días pasados negué por mi parte al Sr. Lerdo la licencia que solicitaba el Ejecutivo para que se separase de la Suprema Corte de Justicia y se encargara del despacho del ministerio de Relaciones, me determinó a votar en ese sentido la idea de que realizándose la separación del Sr. Lerdo, habría un cambio de gabinete, y con él un cambio en la política del gobierno que, según mi humilde opinión, basada en el exclusivismo y en la idea de la infalibilidad del poder, enerva al progreso del país e impide sus adelantos.

Pero no hubo cambio ni en el gabinete ni en la política, y en estas circunstancias creo que insistir en mi negativa a la licencia, que de nuevo solicita el gobierno, no tendría ya más significación que una repulsa meramente personal al Sr. Lerdo, y no entra en mis convicciones atacar a los individuos sino a los principios.

He seguido y seguiré los de la oposición, porque no estoy conforme con la aplicación práctica de los políticos que proclamamos igualmente el gobierno y los que en la práctica disentimos de su modo de juzgar; pero entiendo que en el ejercicio de las funciones de la magistratura no hay los medios para obtener del Ejecutivo las modificaciones que la oposición, y yo con ella, creemos justas y que esto corresponde al Congreso de la Unión; porque en verdad, negar la licencia a un magistrado, cuando se ha visto que la negativa no da ningún resultado práctico, y no poder influir en la formación del gabinete, como puede hacerlo el Congreso, es: aceptar sólo la parte odiosa del asunto, sin fruto para la República.

Así es que, deplorando como deploro el ejercicio de una política con la que no estoy conforme, he querido emitir ese voto por escrito para

poderlo razonar con la independencia y lealtad que nadie en el mundo me puede negar porque nunca he faltado a ellas. El voto en favor de la licencia del Sr. Lerdo se traduce como la separación de la oposición, en la que estoy mientras la estime justa, y esto es absurdo, o como el resultado de cohecho que sólo pueden creer los que sean capaces de recibirlo, y respecto de mí, los que no conozcan el orgullo de mi pobreza y la firmeza inquebrantable de mis creencias políticas de que tengo dadas pruebas.

El voto en contra de la licencia se traduce o como la expresión de la mala voluntad personal, que en ningún caso quiero que se me suponga, o como la expresión inerte de un despecho que no tengo, porque, respecto de mi individuo, es indiferente que gobierne un ciudadano u otro, supuesto que me alejo siempre hasta de la habitación de los gobernantes.

En esta situación y supuesto que la política no ha variado porque el Sr. Lerdo dejase la Secretaría de Relaciones; que la Corte no tiene determinada influencia legal para obtener un cambio de gabinete, y que el único recurso que puede ejercer tiene mucho de odiosidad y nada de eficacia, para el objeto deseado de un cambio de política, no tengo inconveniente en conceder la licencia que solicita el Supremo Gobierno y voto en este sentido.

México, septiembre 9 de 1868.

*José M. del Castillo Velasco*

VOTO PARTICULAR DE LEÓN GUZMÁN  
SOBRE LA LICENCIA A LERDO DE TEJADA

La licencia que se solicita, pedida por el ciudadano Presidente de la República, tal vez sería necesario concederla, porque se pide por una voz muy autorizada y la persona cuya licencia se solicita va a dedicarse al servicio público; pero debe también atenderse a que si la voluntad del ciudadano Presidente quiere que el Sr. Lerdo ayude a su gobierno en uno de los ministerios, la voluntad del pueblo y la del Congreso nacional ha sido que el Sr. Lerdo desempeñe la presidencia de la Corte. Como entre estas dos voluntades es atendible la del pueblo, mi voto es porque no se conceda la licencia al Sr. Lerdo de Tejada.

*León Guzmán*

## LA SUPREMA CORTE Y LOS JUICIOS MILITARES

En los días anteriores<sup>3</sup> ha ocupado a este honorable cuerpo un negocio que nos parece de vital interés. La Suprema Corte, que se caracterizó desde sus primeros pasos de digna de su alta misión, conservando incólume nuestro Código, acaba de patentizar que corresponde al voto de los pueblos, y que es, con razón, considerada como la esperanza de la preponderancia de las leyes.

Aunque vivamente nos afectaba lo que se debatía en el Supremo Tribunal de la Nación, guardamos silencio, hasta el desenlace de la cuestión que estaba al resolverse, en testimonio de respeto a la cuestión misma y a las personas encargadas de su análisis. Concluida ayer, comenzaremos por extractar hasta donde nos sea posible el debate.

Impondremos como proemio al público, de los antecedentes que ha tenido este grave negocio.

El gobierno pasó una nota a la Suprema Corte, manifestándole que en su concepto tocaba a la misma conocer, en revisión y en segunda instancia, sobre las causas militares porque, aunque la Constitución guarda sobre esto silencio, podría dárseles ese sentido a uno de sus artículos; además esa interpretación podría apoyarse así en la legislación anterior a la constitucional, como en algunas leyes secundarias expedidas posteriormente; indicaba por último el gobierno, que, en caso de que la Suprema Corte no se considerase competente para esos fueros, no quedaba más recurso que dirigir al Congreso una iniciativa; en vista de ese documento, y antes de que el fiscal presentase su dictamen, aparecieron diversas opiniones en las conversaciones privadas de los magistrados; todos convenían en que la Suprema Corte carece, por la Constitución, de las facultades necesarias para conocer en esos negocios,

---

<sup>3</sup> Los días 15, 16 y 17 de julio de 1868.



y que el artículo en que se le encomiendan los negocios, en que la federación figura como parte, no podía aplicarse a los juicios militares, sino por una interpretación visiblemente forzada; pero algunos de los mismos magistrados, considerando lo perjudicial que sería para los reos esperar la resolución del Congreso para que se les señalase un tribunal de segunda instancia, se inclinaron al extremo de que la Corte se declarase competente.

El fiscal, persuadido de que por la Constitución la Suprema Corte no está encomendada de los negocios militares, pero deseando que la opinión de los que buscaban una resolución anticonstitucional fuese ampliamente discutida, presentó un dictamen concluyéndolo con la proposición de que la Suprema Corte conociese en los referidos negocios, mientras el Congreso resolvía lo conveniente. Creyó también el fiscal que, supuesto que la cuestión se presentaba como nueva y altamente importante, debía examinarse bajo todos sus aspectos y manifestó, con este objeto, que no sólo se trataba de saber si había tribunales de segunda instancia, sino que también era cuestionable si era legal el tribunal que conoce de la primera, supuesto que los consejos de guerra, sujetos al fallo del comandante general, son contrarios a nuestros principios constitucionales, y ni siquiera pueden apoyarse en la legislación y tendencias de las naciones civilizadas; por lo mismo pidió que en caso de iniciativa se llamase sobre este punto la atención del gobierno y del Congreso.

Este dictamen no fue presentado en forma, porque el fiscal observó que la mayoría de los magistrados estaba resuelta a sostener los principios constitucionales; como éstos son los mismos que deseaba obsequiar el ciudadano fiscal, extendió un nuevo parecer —cuyo lugar notaremos oportunamente— que concluía con la proposición que mencionaremos a su tiempo.

El dictamen que se puso a discusión terminaba, aunque sin ponerlo de una manera precisa, pidiendo que, en caso de que se declarase competente la Corte para conocer en segunda instancia de los juicios militares, se supliese esa falta.

El Sr. Lerdo:

"Ciertamente es que no hay artículo expreso en la Constitución, en virtud del cual pueda considerarse investida la Suprema Corte de Justicia de la facultad de conocer en segunda instancia de los juicios militares; pero en este caso deberíamos indagar el espíritu de la ley, y sin violencia usar de las facultades que se trata.

La Suprema Corte de Justicia es, por la Constitución, un depósito de atribuciones federales, vastísimo, ilimitado en nuestro sistema; es un receptáculo, un manantial de donde se surten y deben surtir a los tribunales de competencia y jurisdicción; en tal virtud ¿cómo no creerse dotada ella misma cuando puede darla a los otros tribunales?

La suma de facultades de que he hablado produce necesariamente el efecto de que, no habiendo jueces en este caso, atraiga el conocimiento de una causa, porque de otro modo quedaría trunco e indefinido un juicio siendo altamente perjudicial a la sociedad.

Por otra parte los juicios militares no pertenecen en manera alguna a los estados; el ejército está al servicio y depende de la federación, luego los juicios militares son federales, y de los juicios federales puede y debe conocer la Suprema Corte de Justicia."

El Sr. Cardoso:

"Mucho se avanza en una cuestión de la naturaleza de la que se trata, cuando no se cree determinada por la urgencia, cuando puede hacerse un alto para reflexionar lo conveniente y sondear las dificultades de la cuestión misma. En este caso estamos.

Muy ingeniosa puede ser la ficción de ese receptáculo de facultades de que puede surtir el Poder Judicial; pero esa no es sino una ficción, una evasiva del texto de la ley. En el sistema que nos rige, el pueblo que es el solo, el único soberano, el que posee la totalidad de facultades para gobernarse, no abdica, ni sus facultades de acción en el Ejecutivo ni de legislar en el Legislativo, ni de juzgar en el Judicial, de suerte que, por esto, no es soberano cada uno de los poderes, ni todos juntos; el soberano único es el pueblo. El pueblo en la Carta fundamental ha procedido por delegaciones, y delegaciones no equívocas, sino expresas al hablar de cada uno de los poderes, no sólo no conociendo a ninguno de ellos en

particular, sino prohibiendo a cada uno especialmente que traslimitasen sus facultades.

En la Constitución de 1824, esta facultad de interpretación quedó indecisa, y esto produjo abusos de muy funesta trascendencia, a la interpretación fue el tránsito llano de la ley a la arbitrariedad.<sup>4</sup>

La acta de reformas corrigió tan grave mal previniendo que no entendieran los poderes con más facultades que las constantes en el Código, sin considerarse investidos con otras por falta de expresa restricción.

El artículo 117 de la Constitución que nos rige dice: «Las facultades, que no están concedidas expresamente por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados».

Para averiguar que no está expresa la facultad de que se trata, basta ver que el Sr. Lerdo ha tenido que recurrir a un raciocinio, y en este raciocinio la inducción es violenta, porque no está conforme con la naturaleza de las facultades que ejercemos.

Grandes intereses, tanto civiles como militares, estaban pendientes en el distrito cuando se instaló la Corte de Justicia: la libertad, la fortuna, la vida misma de muchas personas... y la Corte Suprema se abstuvo de traslimitar sus facultades fungiendo como tribunal del distrito, y se abstuvo con tal energía y con tan fundada resolución, que sólo Dios hubiera podido hacerla retroceder en su camino.

Si es competente, si tiene jurisdicción la Corte de Justicia para juzgar en segunda instancia, ¿por qué no serlo al juzgar en primera? ¿por qué dejar las más preciosas garantías expuestas a las eventualidades del consejo de Guerra? Se dirá que todo esto está prevenido en una ley; pero esa es una ley dada en virtud de facultades extraordinarias, y semejantes leyes no pueden en manera alguna modificar ni destruir las leyes fundamentales.

¿No se ve que así en veinticuatro horas de facultades extraordinarias, en un instante de dictadura se podía aniquilar la Constitución?

---

<sup>4</sup> Confuso; se quiso decir de la interpretación forzada se pasó a la arbitrariedad.

Nada hay más peligroso que consentir en que se barrene o se nulifique la ley a título de buscar su espíritu; es tanto como resignarse con la arbitrariedad bajo el pretexto de interpretación de la ley misma.

La aclaración de la ley, en este caso, sería un acto legislativo, que en ninguna manera daría validez a nuestros actos; y ¿cómo declararnos competentes y juzgar?

Juzgar porque la jurisdicción no nos debe venir de la investidura que hoy tenemos, sino de la ley que nos constituye. "¿Qué hacer, pues, con los juicios que están pendientes? Nosotros, nada, porque no tenemos arbitrios, no somos los llamados a proveer a esa necesidad. "Las controversias y los conflictos federales están determinados en el Código, no se quiera incluir en ellas este delito especial, porque eso rompería nuestros títulos, nos constituiría en revolucionarios..."

Sr. Guzmán (León):

"Que confesaba francamente que las razones llenas de lucidez y de elocuencia del Sr. Cardoso, son incontestables: me asiste la convicción de que no tenemos competencia para juzgar en segunda instancia; pero los males que se siguen por esa omisión de nuestro Código son tales, que por mi parte afronto la responsabilidad de que juzguemos en segunda instancia, mientras determina el Congreso."

El Sr. Lerdo:

"Hago notar mi desacuerdo con el Sr. Guzmán: yo no creo que se barrena la ley; por el contrario, si de tal me convenciera, en el debate desde luego votaría conforme con las ideas expuestas por el Sr. Cardoso."

El Sr. Riva Palacio:

"Insistió ampliando de una manera muy luminosa y enérgica los argumentos del Sr. Cardoso, y se fijó con más insistencia en lo que sigue: El artículo 13 de la Constitución —dijo—, textualmente se expresa así: «subsiste el fuero de guerra solamente para los delitos y faltas que tengan exacta conexión con la disciplina militar. La ley fijará con toda claridad los casos de esta excepción». ¿Con qué facultad borramos de la Constitución el anterior artículo? ¿Con cuál traemos al fuero de los negocios comunes ese fuero único que ha creído conveniente conservar

la Constitución? ¿Dónde está esa ley que determina con toda claridad los casos de la excepción?

El texto de la Constitución es inequívoco, nuestra incompetencia evidente."

El Sr. Lerdo:

"Que era mejor nulificar ese fuero, porque todo privilegio era contrario a la democracia: que todo aquello que tendiera a cercenarlo, era avanzar en el terreno de la libertad."

El Sr. Lafragua:

"Acopiando generalidades, insistió en querer probar que conocer de las causas militares no podía ser sino de la competencia de la Corte de Justicia."

El Sr. Castillo Velasco:

"Con una copia afluéntísima y ordenada de argumentos probó que los delitos militares no tenían ese carácter federal que quería comunicársele, ni arrastrarse al fuero común: «¿qué son pues los delitos militares?... militares simplemente; ¿para qué crearnos la otra disyuntiva forzosa? ¿Por qué no considerarlos en la acepción neta y primitiva que quiso darles la Constitución? Los delitos militares no son más que militares». "Al último reclamó con voz muy conmovida: «Una vez que somos, que nos declaramos impotentes, que nos reconocemos sin título legal para el juicio, ¿quién, señores, quién con la mano sobre su conciencia enviará a un hombre al patíbulo ?...»

Después de la honda pausa que produjo el vehemente apóstrofe del Sr. Castillo, se divagó en generalidades la discusión y se anunció que se procedía a la votación.

Una voz:

"¿Qué se vota?"

El Sr. Lerdo:

"Si conocerá la Suprema Corte de Justicia en segunda instancia en los juicios militares."

El Sr. Cardoso:

"Pido que se vote como debe ser. ¿Es competente la Suprema Corte de Justicia para conocer en segunda instancia en los juicios militares?"

Una ligera aunque acalorada discusión entre los Sres. Lerdo y Cardoso.

El Sr. Simón Guzmán:

"Pido que se vote la proposición del fiscal."

Uno:

"No está formulada."

El Sr. Altamirano:

"Voy a formularla."

Se acerca a la mesa y escribe violentamente:

"La Suprema Corte de Justicia no es competente para conocer en segunda instancia en los juicios militares."—Altamirano.

#### Comienza la votación

Afirmativa

Cardoso

Riva Palacio

Castillo Velasco

León Guzmán

Ogazón

S. Guzmán

Negativa

Lerdo

Ordaz

Lafragua

García Ramírez

Zavala

Está aprobada la proposición del fiscal.

Hay un largo intervalo de silencio.

El Sr. Zavala se levanta, escribe y dice:

Hago la proposición siguiente:

"En virtud de la urgente necesidad, la Suprema Corte de Justicia conocerá en segunda instancia en los juicios militares hasta la reunión del Congreso."

Hubo verdadero estupor al ver establecido un antítesis como el que forman la proposición aprobada y la del Sr. Zavala.

Se procede a la votación. Se hace notar que, puesto que no era pedimento fiscal, debía votar el Sr. Altamirano. Se vota porque se le excluya.

El Sr. Cardoso vota en contra.

Queda excluido.

Se procede a votar la proposición del Sr. Zavala.

Afirmativa

Negativa

Lerdo

Cardoso

León Guzmán

Riva Palacio

Lafragua

Ogazón

García Ramírez

Castillo Velasco

Zavala

Simón Guzmán

Ordaz

La segunda proposición se declara aprobada.

El Sr. Cardoso (en pie y con voz enérgica):

"Protesto solemnemente contra la validez de este acto: declaro y quiero que conste que lo considero anticonstitucional y que nada, ni nadie me hará conocer en un juicio para que no sea competente."

El Sr. Lerdo:

"Será necesario sujetarse a la mayoría."

(El Sr.) Cardoso:

"La mayoría no tiene imperio sobre mi conciencia de hombre."

(El Sr.) Riva Palacio:

"El voto de la mayoría es acatable cuando obra en el círculo legal; fuera de él es una presión revolucionaria."

(El Sr.) Cardoso:

"Que conste mi protesta."

Se levantó la sesión.

Al siguiente día (jueves) no asistió el Sr. León Guzmán.

Al aprobarse la acta, formuló su protesta el Sr. Riva Palacio, consecuente con lo que había expuesto en la discusión.

Suscitóse un empeñado debate sobre el modo de dar conocimiento al gobierno de lo ocurrido.

El partido ministerial pedía que sólo se le trasladase una parte de la acta.

La oposición quería que fuese íntegra.

El Sr. Castillo Velasco:

"Propuso que comunicase lo conducente al objeto."

El Sr. Lafragua:

Dijo: que puesto que el voto del Sr. Guzmán había decidido, era indispensable esperar a que asistiese a la aprobación de la acta.

Quedó aplazada la aprobación para el viernes. Se levantó la sesión.

Reunidos el viernes todos los magistrados, rompió el silencio el Sr. Lafragua, imponiendo de lo ocurrido al Sr. León Guzmán.

El Sr. Lerdo:

"Comentando la opinión vertida por el Sr. León Guzmán en el debate, dijo: que dicho señor quería decir no que era anticonstitucional lo consultado en la segunda proposición, esto es, que más bien dicho era extraconstitucional o no incluido en la Constitución; pero no opuesto a ella..."

El Sr. Guzmán:

"Yo no autorizo ni reconozco facultad en el Sr. Lerdo para que interprete, ni comente, ni deduzca nada de mi dicho; dije, y ahora repito, que creía que era incompetente la Corte, y que



pasaba porque se rompiese, porque se quebrantase la Constitución, apechugando francamente esa responsabilidad, en obsequio de la conveniencia pública."

El Sr. Lerdo insiste en atribuir al Sr. Guzmán otras ideas.

El Sr. Guzmán le interrumpe y, conforme las facultades que le da el reglamento de la Corte, reforma su voto, quedando reprobadas la proposición segunda, en que se declara la Corte incompetente, y derrotada de la manera más concluyente la política de subterfugios y evasivas del ministerio.

¡Honor a la inteligencia y a la probidad del Supremo Poder Judicial!

Nos reservamos para otro número los comentarios.

*Guillermo Prieto*

## EL MINISTRO DE JUSTICIA DA SU OPINIÓN SOBRE LA SEGUNDA INSTANCIA DE LOS JUICIOS MILITARES

Ciudadano juez de...

Hoy digo al ciudadano ministro de Guerra y Marina lo que sigue: "La Suprema Corte de Justicia de la Nación comunica a este ministerio, con fecha 15 del actual, que se ha declarado incompetente para conocer en las segundas instancias de los juicios militares. En vista de esta declaración el ciudadano Presidente se ve en el caso de resolver sin demora cuál es el tribunal a donde debe ocurrirse para el conocimiento de esas segundas instancias, cuya paralización ocasionará gravísimos perjuicios a multitud de acusados, pues su prisión se prolongaría largo tiempo hasta que el Congreso resolviera este punto; a la disciplina del ejército por la suspensión de los juicios destinados a conservarla; y a la sociedad entera, cuya paz depende ahora de esos mismos procesos, por tener que juzgarse militarmente a los conspiradores y trastornadores del orden, conforme el decreto expedido por el Congreso en 6 de mayo último.

A reserva, pues, de ocurrir oportunamente al legislador, para que resuelva la duda que se ha considerado existir en esta materia, y que parece confirmada por la declaración de la Suprema Corte, el gobierno, atento a la conservación de la primera garantía de todo acusado, la de tener un tribunal que lo juzgue, a la defensa de la disciplina militar, sin la cual la fuerza armada no puede servir para su objeto, y al mantenimiento del orden y las instituciones, del cual se halla especialmente encargado, acepta la responsabilidad de declarar, siguiendo el espíritu de la Constitución y las leyes, cuál es en la actualidad el tribunal a quien corresponde conocer de dichas instancias.

Había creído primero el gobierno que lo era la Suprema Corte de la nación, a quien sometió su parecer con las razones en que lo fundaba. Las

principales consistían en que los juicios militares son de la competencia federal, pues que en ellos hay controversia sobre aplicación de leyes federales, y en ellos es parte la federación, circunstancias que, conforme a las fracciones 1ª y 3ª del artículo 97 de la Constitución, hacen que correspondan a los jueces federales. Hay controversia en esos juicios, como la hay en todos, y son federales las leyes que tratan de aplicarse, pues por la fracción 18, artículo 85 de la ley primaria, sólo puede expedirlas el Congreso general, y en su cumplimiento está interesada la federación, de quien exclusivamente depende el ejército. También sucede que la federación es parte en esos juicios, pues en toda contienda criminal hay un acusador real o supuesto, y en los juicios de que se trata hace este papel el fiscal, que obra primero como juez instructor bajo las órdenes del comandante militar, y concluye sus funciones pidiendo formalmente la aplicación de la ley en nombre de la nación, es decir, de la federación, y no de algún estado, aun cuando en él se siga el proceso.

La única objeción que pudiera hacerse, es que el artículo 90 de la Carta federal deposita el Poder Judicial de la federación, o sea su ejercicio: "en una Corte Suprema de Justicia y en los tribunales de distrito o circuito". Se dirá, pues, que en este artículo no están incluidos los tribunales militares, y que de consiguiente no son federales. El gobierno cree que un artículo constitucional no debe nunca entenderse aisladamente, ni menos para deducir por conclusión un absurdo. La Constitución misma, en su artículo 13, establece el fuero de guerra para los delitos y faltas que ella indica y de consiguiente le establece también tribunales militares, que si no fueran federales, tampoco serían de los estados, y no podría decirse cuál era la fuente de su jurisdicción.

La organización de esos tribunales especiales debían ser obra de una ley posterior a la Constitución y esa ley posterior se dio en efecto en 9 de abril de 1862, por el gobierno, investido de facultades extraordinarias. En ella se reformó el decreto del Gral. Comonfort, expedido en virtud de las mismas facultades, quien lo promulgó con fecha 15 de septiembre de 1857, es decir, un día antes de comenzar a regir la Constitución. Esto, no obstante el decreto, se había considerado vigente hasta entonces. En él se disponía que la Suprema Corte conociera

de las segundas y aun de otras instancias de los juicios militares, conforme a la ley de 23 de noviembre de 1855, que determinaba el modo con que ese tribunal supremo se erigía en corte marcial. La ley de abril de 1862 disponía a su vez que en el Distrito Federal conocieran de las segundas instancias, a que me contraiga, la Suprema Corte de Justicia, y en los estados sus respectivos tribunales superiores. El motivo de esta disposición en cuanto a los estados parece haber sido que por entonces se hallaban suprimidos los tribunales de distrito y de circuito en virtud de las expresadas facultades. Faltando hoy ese motivo, pues que se hallan funcionando hoy todos los tribunales de la federación, creyó el gobierno que debía considerar vigente la ley de 1862, en la parte que cometía a la Suprema Corte las segundas instancias de los juicios militares seguidos en el distrito, y respecto a los de los estados, que por igualdad de razón corresponderían también dichas instancias al tribunal supremo.

Tales eran los fundamentos de la opinión del ciudadano Presidente, comunicada a usted en nota de este ministerio el 6 de mayo último; mas como semejante opinión, según se ha manifestado al principio, no ha sido confirmada por la Suprema Corte, que se ha declarado incompetente para conocer de las segundas instancias en todos los juicios militares, ya se originen en el Distrito Federal o en los estados, acatando esa resolución como es debido, el gobierno cree que debe ocurrirse, en los casos de que se trata, a los tribunales federales que ordinariamente conocen en segunda instancia de los juicios en que está interesada la federación, es decir a los tribunales de circuito. En efecto, la ley de 22 de mayo de 1834 que refundió la de 20 de mayo de 1826, primera de las que se expidieron para organizar los tribunales de distrito y circuito, establecidos por la Constitución de 24 y la de 23 de noviembre de 55, que en parte hace al caso, son las vigentes acerca de la competencia de estos tribunales en primera y segunda instancia sin que nadie haya puesto en duda su constitucionalidad después de expedida la Carta de 57, la cual nada dice sobre las instancias en que conocerán los indicados jueces dejando este punto a la legislación secundaria. La falta de una ley posterior a nuestra actual Constitución no ha sido ni puede ser un embarazo, pues siempre se ha entendido que faltando una ley orgánica, se debía suplir con otra

anterior vigente de cualquiera especie, que no pugnara con el Código fundamental, y así lo ha sancionado la práctica a ciencia y paciencia del legislador, tanto en esta materia como en otras muchas en que no se han expedido leyes orgánicas. Todo podría concluirse de la interpretación constitucional, menos que por falta de la legislación secundaria no hay funcionarios a quienes ocurrir para hacer efectivas las primeras garantías sociales, los principales fines de la Constitución misma.

Ahora bien, las citadas leyes disponen que los tribunales de circuito sean los de alzada o revisión de las sentencias pronunciadas por los jueces de distrito, y en la actualidad, conforme a las mismas leyes, dichos tribunales conocen siempre en grado de vista, a excepción de las causas de responsabilidad de los jueces de distrito, sus inferiores. Son, pues, los tribunales comunes de segunda instancia entre los de la federación. Por otra parte, es bien sabido que cuando falta un tribunal especial, debe ocurrirse al ordinario o común que tiene la misma jurisdicción de un modo más pleno. Por lo mismo, faltando ahora en segunda instancia los tribunales militares, que pertenecen a la federación, aunque sean de un orden especial, deberá ocurrirse a los que en la misma línea tienen la jurisdicción ordinaria para esa instancia. No se hace en esto violencia alguna al espíritu de la Constitución que, según queda demostrado, considera a los juicios militares del resorte general de la federación, ni siquiera se ataca el fuero especial que dicho Código establece para ciertos delitos y faltas, pues siempre se dirá con propiedad que subsiste el fuero militar con sólo que existieren para la primera instancia tribunales especiales, como hoy se verifica, sin que haya expresión alguna en el texto constitucional que exija semejantes tribunales para todas las instancias.

Resumiendo brevemente lo expuesto, el gobierno cree que son competentes para la segunda instancia de los juicios militares los respectivos tribunales de circuito. Creyó primero que lo era la Suprema Corte de Justicia, porque entendió se hallaba vigente la ley de 9 de abril de 1862, parte en su texto y parte en su espíritu; mas siendo esta creencia inconciliable con la reciente declaración de la misma Suprema Corte, la reforma en el sentido expresado. Cree todavía que los juicios militares

son indudablemente de la competencia general de los tribunales de la federación, y que, a falta de tribunales especiales en esta línea, se debe ocurrir a los ordinarios y comunes. Éstos son los de circuito, que tienen a su cargo las segundas instancias, no habiendo otros que conozcan de ellas entre los federales, a no ser la Suprema Corte en las causas de responsabilidad de los jueces de distrito, y en los casos de diversa jerarquía en que empieza a conocer desde la primera instancia.

Tales son ahora los fundamentos de la opinión que adopta el Ejecutivo para llevarla a cabo provisionalmente y hasta donde quepa en sus atribuciones, dejando que los jueces a quienes corresponde, en vista de las razones ya apuntadas y de las demás que militen en el caso, procedan guiados por su ilustración y patriotismo, como lo exijan la justicia y la conveniencia nacional en las circunstancias todavía anormales que guarda la República."

Y lo transcribo a usted con el objeto que se indica en la misma preinserta comunicación.

Independencia y Libertad. México, 18 de julio de 1868.

*Ignacio Mariscal*

SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA  
SOBRE EL CASO DEL GOBERNADOR  
GÓMEZ CUERVO

En la ciudad de México, a veintidós de agosto de mil ochocientos sesenta y ocho, reunidos en la sala de acuerdos de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos los ciudadanos Presidente Lerdo de Tejada, ministros Riva Palacio, Lafragua, Ordaz, Cardoso, Castillo Velasco, Guzmán, Velázquez, Zavala y García Ramírez y procurador general, con el objeto de erigirse en jurado de sentencia para pronunciar la correspondiente en la causa seguida a don José Antonio Gómez Cuervo, gobernador constitucional del estado de Jalisco, por no haber dado cumplimiento al auto del juez de distrito de Guadalajara, que declaró abierto el juicio de amparo mandando suspender la ejecución de cinco reos, cuyo hecho estimó culpable el Congreso de la Unión erigido en jurado de acusación, como que envolvía la infracción de la ley de 30 de noviembre de 1861 y de la Constitución; hecha relación del proceso en audiencia pública, oídos el parecer fiscal que concluye pidiendo que la Suprema Corte de Justicia declare que el gobernador de Jalisco, don. José Antonio Gómez Cuervo, no ha incurrido en pena alguna por no haber ley que la designe y que por equidad se le dé por compurgado con el tiempo que lleva de suspensión de su encargo por consecuencia del veredicto de culpabilidad; el alegato de los acusadores ciudadanos Apolonio Angulo y Silviano Moreno, en el que, sin fijar la pena que merezca el culpable, insiste en demostrar que la separación que ordena el artículo 105 de la Constitución envuelve una formal destitución del encargo; la defensa del acusado por su patrono el ciudadano Alfonso Lancáster Jones. Impugnando los fundamentos de los acusadores, y pidiendo se declare que el acusado no ha incurrido en pena por falta de ley especial de responsabilidades, o que se le dé por compurgado con los padecimientos

sufridos, vistas las constancias del proceso con lo demás que se tuvo presente y ver convino:

Considerando en cuanto a la inteligencia que deba darse a las palabras: "quedará inmediatamente separado de dicho encargo" de que usa el artículo 105 de la Constitución;

Primero: que el fundamento que se alega para que por dichas palabras se entienda una verdadera destitución y consiste en que la mente del Congreso Constituyente de 1857 fue establecer en la República el juicio político de los Estados Unidos del Norte, no es exacto, pues aparece de la historia del mismo Congreso que el proyecto fue desechado;

Segundo: que la idea que se adoptó para los juicios de responsabilidad, fue la del ciudadano diputado M. Castañeda, y de su discurso aparece que el primer jurado sólo hace la suspensión del funcionario, hasta la terminación del juicio;

Tercero: que encomendado éste a dos jurados, el uno de hecho y el otro de sentencia y siendo evidentemente una pena la destitución no podría ser decretada por el juez de hecho;

Y cuarto: que, cualquiera que hubiese sido la mente de los legisladores, no hay fundamento legal para alterar la significación de las palabras que usa el artículo 105, mayormente cuando en el artículo anterior se emplean las mismas palabras para significar sólo la suspensión del acusado como se ha entendido y reconocido por todos, sin que se haya puesto en duda su natural sentido.

Considerando en cuanto a la pena que deba imponerse al culpable:

Primero: que el jurado se ve en la precisa obligación de pronunciar sentencia condenatoria, supuesta la declaración de culpabilidad hecha por el Congreso de la Unión erigido en jurado y la consignación que le hizo del reo;

Segundo: que perfecta la averiguación y dado por concluido el proceso, es indispensable fijar la condición del reo por el auto definitivo, y procediendo la Corte con la autoridad que le da la Constitución y



conforme a derecho, pues si dejare incierta la condición del procesado por un tiempo indefinido y tal vez sin término, sería la más inicua violación de las garantías constitucionales;

Tercero: que en la causa constan probadas circunstancias muy atenuantes del delito que debe estimar cualquier juez ordinario y más todavía un jurado, por la naturaleza misma de su institución.

Cuarto: que estas circunstancias atenúan de tal manera la culpabilidad, que han influido en el ánimo del jurado para imponer una pena mínima;

Y quinto: que no se ha dictado una ley especial que regule los delitos oficiales y gradúe sus penas.

El jurado, teniendo en consideración los fundamentos expuestos, falla:

Primero: la separación de don José Antonio Gómez Cuervo de su cargo, por virtud del veredicto del Congreso de la Unión, sólo ha importado la suspensión del mismo cargo hasta que fuese impuesta la pena por el jurado de sentencia.

Segundo: se da por compurgado al Sr. Gómez Cuervo con el tiempo que lleva de suspensión de su encargo y demás padecimientos sufridos. En consecuencia, quedará en absoluta libertad y repuesto en su cargo de gobernador constitucional del estado de Jalisco.

Tercero: remítanse testimonios de este fallo al Congreso de la Unión, devolviéndose el expediente al gobierno de la Unión y al gobierno del estado de Jalisco para su conocimiento y al juzgado de distrito de Guadalajara para que lo notifique al ciudadano Gómez Cuervo y mande cancelar la fianza que tiene dada.

Hágase saber y publíquese.

Así lo acordaron por mayoría de votos los ciudadanos magistrados que formaron el jurado de la sentencia y firmaron.

*S. Lerdo de Tejada*  
*J. M. Lafragua*  
*Joaquín Cardoso*  
*Simón Guzmán*  
*M. Zavala*  
*León Guzmán*

*Vicente Riva Palacio*  
*Pedro Ordaz*  
*J. M. del Castillo Velasco*  
*Luis Velázquez*  
*José García Ramírez*  
*Luis María Aguilar*

VOTO PARTICULAR RAZONADO  
DEL PROCURADOR GENERAL LEÓN GUZMÁN  
EN EL CASO GÓMEZ CUERVO

La idea que tengo de los deberes que me incumben como funcionario público constitucional, me ha puesto en la penosa necesidad de no estar de acuerdo con el fallo que el gran jurado de sentencia pronunció en el juicio de responsabilidad seguido contra don Antonio Gómez Cuervo por infracciones de la Constitución y de la ley orgánica de Juicios de Amparo.

Al emitir mi voto negativo, ofrecí usar del derecho que tengo para expresar sus fundamentos. Éstos son los que paso a consignar.

Pronunciado por el gran jurado de acusación el veredicto en que declara culpable al Sr. Gómez Cuervo, la Suprema Corte está en el caso de ejercer la atribución que le confiere la parte final del artículo 105 de la Constitución. Ese artículo previene que imponga al culpable la pena que la ley designe.

Es un hecho reconocido por el ciudadano fiscal, por los ciudadanos acusadores y por el ciudadano defensor del reo, que no hay ley que designe pena para el delito del Sr. Gómez Cuervo; y para que ninguna duda quede, el mismo hecho ha sido consignado por el gran jurado de sentencia en el último de sus considerandos. Es imposible aplicar una pena que no existe; es, pues, imposible que el gran jurado de sentencia falle la causa del Sr. Gómez Cuervo.

¿Qué debe entonces hacer? Una cosa muy sencilla y muy natural: consignar el hecho de que no hay pena; y fundado en esta dificultad invencible, declarar que no puede fallar.

Reconocer el hecho de que no hay pena designada por la ley, y sin embargo imponer una pena, es un evidente contraprincipio, y es también una violación flagrante del artículo 105 de la Constitución.

Este sencillo raciocinio basta para fundar un voto negativo; pero como para apoyar el fallo se ha apelado a otra clase de razones que están fuera de la ley, me creo en el deber imprescindible de ocuparme de esas razones.

Se dice que "el jurado se ve en la precisa obligación de pronunciar sentencia condenatoria". Probado que no es posible pronunciar esa sentencia, se sigue necesariamente que la obligación es imposible de llenar. Una obligación imposible pierde su carácter de obligación. Entra en la esfera de necesidad indeclinable.

Se dice "que perfecta la averiguación y dado por concluido el proceso, es indispensable fijar la condición del reo, por el auto definitivo". Esto es lo que en lógica se llama petición de principio; esto es resolver la cuestión por la cuestión misma. El único medio que el jurado tiene para fijar la condición del reo, es el de fijar su causa; así, pues, para probar que el jurado puede fijar la condición del reo, es preciso probar antes que puede fallar.

No puede fijarse la condición de un reo sino absolviéndolo o condenándolo. Absolverlo, sería un atentado, porque está declarado culpable; condenarlo, es otro atentado porque la condenación debe consistir en aplicarle la pena que la ley designa, y no hay ley que designe esa pena. Luego es imposible que el jurado de sentencia fije la condición del reo.

Se agrega, "que dejar incierta la condición del procesado por un tiempo indefinido, y tal vez sin término, sería la más inicua violación de las garantías constitucionales". No debo ni quiero discutir si positivamente hay violación, ni si es, inicua; pero sí debo hacer constar que la condición en que el reo fue puesto a disposición del jurado de sentencia, es una consecuencia natural y legal del veredicto de culpabilidad. Debo también insistir en que el jurado de sentencia sólo puede cambiar esa condición por medio de un fallo, y que le es imposible dictarlo.

Aunque se cuida de no usar la palabra arbitrariedad, la verdad es que se pronuncia una sentencia arbitraria; y esta sentencia ni siquiera merece el nombre de "arbitrio judicial". El arbitrio judicial supone

necesariamente la existencia de una ley, y el arbitrio consiste en aumentar o disminuir, según la prudente calificación del juez, la pena que esa ley establece. En la sentencia de que me ocupo no sólo se impone pena, sino también se inventa. Tal procedimiento no merece otro nombre que el de dictadura judicial y bien sabido es que ésta es la más funesta de todas las dictaduras. Tal dictadura no sólo es contraria al artículo 105 de la Constitución, sino también a los artículos 14 y 117 de la misma Constitución. El 14 previene que nadie pueda ser sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho, y exactamente aplicadas a él; el espíritu claro y evidente del 117 es: que los funcionarios federales no ejerzan sino aquellas facultades que les están expresamente concedidas por la Constitución, y el artículo 105 dice: que el gran jurado debe imponer la pena que la ley designe.

Si el jurado de sentencia, por falta de ley que imponga pena, no puede aplicarla, tampoco puede computar las circunstancias agravantes o atenuantes. Este cómputo tiene por objeto aumentar o disminuir la pena; y una pena que no existe, no puede ser aumentada ni disminuida.

Se alega a este respecto la calidad de jurado que en este negocio tiene la Suprema Corte de Justicia. La naturaleza de un jurado, propiamente tal, se presta muy bien a que sus fallos no tengan más fundamento que la conciencia de los vocales que lo componen; pero en el caso presente, la naturaleza del jurado está esencialmente modificada por el artículo 105 de la Constitución, que impone la obligación de aplicar la pena que la ley designe.

Se dice que las circunstancias atenuantes del delito han influido de tal manera en el ánimo del jurado, que lo decidieron a imponer una pena mínima. No debo dejar que estas especies pasen desapercibidas. Se tiene por pena la separación del Sr. Gómez Cuervo del gobierno del estado de Jalisco, los sufrimientos y mortificaciones consiguientes a su calidad de procesado; y a esto sólo se puede agregar la obligación que se le impuso de otorgar una fianza. Es de advertir, en primer lugar, que el Sr. Gómez Cuervo se separó del gobierno de Jalisco mucho tiempo antes del veredicto de culpabilidad, y se separó en virtud de una licencia concedida por la Legislatura del estado. Por consiguiente, en realidad de verdad, la

separación del gobierno no ha procedido del veredicto de culpabilidad, sino de una licencia, cuyo término aún no se cumple.

En segundo lugar, la separación de cargo, en virtud de un veredicto de culpabilidad, no es una pena sino, como antes indiqué, una consecuencia natural y legal del mismo veredicto. No puede tenerse como pena legal lo que es y no puede ser más que una consecuencia inevitable del veredicto.

Además, es necesario examinar qué clase de delito ha cometido el Sr. Gómez Cuervo. Su delito es haber violado la Constitución y la ley orgánica de Amparos; y estas violaciones han dado por resultado inmediato el asesinato de cinco hombres. Y digo asesinato, porque suponiendo a esos hombres los más culpables del mundo, la verdad es que no eran criminales ante la ley. Ante ésta sólo es criminal el que ha sido juzgado y sentenciado legalmente, y en el caso de esos cinco desgraciados no ha habido juicio legal y, en realidad, absolutamente no hubo juicio. ¿Y qué, una violación de la Constitución, una violación de la ley orgánica, que garantiza el sagrado derecho de amparo, y ambas violaciones que producen el asesinato de cinco hombres; todo esto, digo, puede quedar castigado con que el culpable sufra por unos cuantos meses las consecuencias naturales y legales del veredicto de culpabilidad? Yo no tengo valor para autorizar semejante fallo.

Me abstengo intencionalmente de establecer un paralelo entre el veredicto de culpabilidad y el fallo del jurado de sentencia; pero no puedo hacer más que destruir las consecuencias naturales y legales de ese veredicto.

La sentencia del jurado contiene además una declaración de que la separación del culpable es una mera suspensión. En la discusión que precedió al fallo cuidé de no tomar parte en la relativa a este punto, de ello pueden dar testimonio todos los ciudadanos magistrados, y muy especialmente el ciudadano Presidente. Creo que el jurado debió abstenerse también de tratar y resolver esa cuestión, porque su misión clara, inequívoca y exclusiva, es la de aplicar la pena que la ley designe. En esa misión no puede absolutamente haber la de explicar los preceptos constitucionales, y mucho menos aquellos que en nada se relacionan con

la misión del jurado de sentencia. Por tal motivo, no puedo aceptar esa declaración sino como una opinión de los ciudadanos magistrados que votaron el fallo y, con calidad también de opinión, paso a exponer los fundamentos del juicio que me he formado en esa materia.

Comenzaré por aceptar el mismo tema que se ha seguido para la discusión de este punto. Se dice que la palabra "separado" está usada por la Constitución, lo mismo en el artículo 104 que en el artículo 105, es decir, tanto en el caso de delito político como en el de delito común, se usa de la misma palabra y, por consiguiente, ésta debe tener en ambos la misma significación. Estoy absolutamente conforme. Se agrega que en el artículo 104, es decir en el caso de delito común, la palabra "separado" significa "suspensión". En esto no estoy conforme. Se da por fundamento que el proyecto que prevaleció, y forma ahora el texto constitucional, fue el del Sr. diputado Castañeda, y éste usó de la palabra "suspense". Es cierto el hecho pero también lo es otro posterior, que paso a consignar. Después de aprobado el proyecto del Sr. Castañeda, los partidarios de la separación absoluta siguieron trabajando en este sentido, y lograron cambiar la opinión de los señores diputados. Cuando estaba próxima a concluir la discusión del proyecto, el Congreso nombró una comisión especial, compuesta de los Sres. Ocampo, Ruiz (D. Joaquín) y yo, para que redactase la minuta de la Constitución. Por causas que no es del caso referir, los Sres. Ocampo y Ruiz se separaron del seno del Congreso, y yo quedé solo en la comisión de redacción. En una sesión pedí que se integrara la comisión, pero el Congreso, en vez de acceder a mi petición, se sirvió acordar que yo solo redactase la minuta. La redacté solo, y sin más auxilio que el del Sr. diputado Gamboa, que se me asoció en calidad de amigo. En muchos de los artículos aprobados hice cambios de redacción, y algunos también en lo sustancial de los artículos. Al dar cuenta al Congreso con la minuta, adopté el medio de leer, primero cada artículo tal cual había sido aprobado, y luego el mismo artículo con la nueva redacción. Cuando había diferencia sustancial, llamaba yo sobre ella la atención, y así lo hice en el artículo 104. El Congreso aprobó la minuta sin hacer la más pequeña variación, y, por consiguiente, quedó aprobado por él el cambio de la palabra "separado" en vez de la palabra

"suspensio". Ahora bien, sería un contrasentido que el Congreso retirase la palabra "suspensio" y en su lugar pusiese la palabra "separado" si esta última había de significar lo mismo que la primera. Luego la palabra "separado", usada en el artículo 104, no puede entenderse suspensión, sino separación absoluta. Estos hechos son ciertos, evidentes, auténticos, y bastan para probar que, en el artículo 104 de la Constitución, la palabra "separado" no significa "suspensio" y, por consiguiente, mucho menos puede tener esa significación en el artículo 105.

Pero quiero tratar la cuestión en sí misma, y a la luz de los principios constitucionales. Comenzaré por consignar un hecho notorio. El Congreso de la Unión, cuando obra como gran jurado, se sujeta a los mismos trámites, bien sea que juzgue un delito oficial, bien califique un delito común. En uno y en otro caso hay acusación, que pasa sin más trámite a la sección del gran jurado; ésta sustancia del expediente, evacuando todas las diligencias necesarias, examinando testigos, careándolos, si es necesario, con el acusado, a quien toma declaración preparatoria y hace confesión con cargos. En uno y en otro caso, la sección presenta dictamen; y la única diferencia es que, al tratarse de delito común, concluye consultando "ha o no lugar a proceder", y si se trata de delito oficial, consultando "es o no culpable". Esta diferencia de fórmulas procede de la distinta naturaleza de los delitos; porque conforme a la Constitución, los delitos comunes se castigan por los tribunales ordinarios, y los delitos políticos por jurados político judiciales.

Para entender bien esta diferencia es necesario explicar, aunque sea ligeramente, varios principios constitucionales, que el Congreso constituyente cuidó de establecer de una manera terminante. Uno de esos grandes principios es la universalidad del fuero común. La Constitución quiso que todos los delitos fueran juzgados por los tribunales ordinarios, sin más excepción que las expresamente establecidas por la misma Constitución.

Otro de esos grandes principios es el fuero constitucional de los altos funcionarios. Este fuero no es una cosa arbitraria, no es una cosa que puede darse y quitarse a voluntad; es una prerrogativa de tal manera



anexa, hasta tal punto inseparable de la calidad de alto funcionario que en el sentido constitucional no puede haber alto funcionario sin fuero; de la misma manera que no se puede concebir fuero sin que esté adherido a la calidad de algún funcionario.

Ahora bien, si el delito común de un alto funcionario debe ser castigado por el tribunal común, y si ese alto funcionario es inviolable en virtud de su fuero para que la pena tenga lugar, es absolutamente preciso comenzar por despojarlo de este fuero. Esto es lo que significa la declaración de que "ha lugar a proceder" contra el alto funcionario. Si así no fuera, tendríamos el absurdo de que un alto funcionario conservaba su calidad de tal, y no tenía fuero; y ya he hecho notar que esto pugna con los principios constitucionales. Más claro: esto sería una violación patente de la Constitución.

Y no se diga que la declaración de haber lugar a proceder no tiene la fuerza bastante para despojar al funcionario de su fuero y de su investidura de tal funcionario: En primer lugar, si el expediente instruido, en caso de delito oficial, basta para que el jurado declare legalmente que el funcionario acusado es culpable, la razón de esto es porque el expediente basta para formar un juicio seguro sobre esa culpabilidad. Pues de la misma manera, si en el caso de delito común se instruye el mismo expediente y se evacúan las mismas diligencias, es preciso concluir que ellas bastan para que el gran jurado forme juicio seguro sobre la culpabilidad. Por consiguiente, al declarar que ha lugar a proceder, tiene conocimiento pleno de esa culpabilidad.

Nótese, además, que en el nuevo sistema establecido por la Constitución, la declaración del jurado es que "ha lugar a proceder", a diferencia del antiguo sistema en que se declaraba "ha lugar a formación de causa". Entre estas dos fórmulas hay una diferencia sustancial y, en virtud de ella, la declaración de "ha lugar a proceder" no puede significar sencillamente que se sujete a juicio al acusado, sino que se proceda contra él, como se procede contra los delincuentes; es decir que se le castigue.

Por todas estas razones y otras que omito, por no ser difuso, es evidente que la declaración de "haber lugar a proceder" envuelve

necesariamente la pérdida del fuero constitucional; y como éste está íntimamente adherido a la calidad de funcionario, la palabra "separación" no puede explicarse constitucionalmente sino por esta otra: "destitución". Sin admitir esta explicación, que es la natural y legítima, habría necesidad de parar en uno de dos extremos, que son igualmente absurdos: o admitir que los tribunales comunes pueden proceder contra un alto funcionario a pesar de su fuero, o que puede haber un alto funcionario que no disfrute fuero. He dicho que ambos extremos son absurdos; y tengo necesidad de agregar que son notoriamente contrarios al texto y al espíritu de la Constitución.

Mucho más se puede alegar en apoyo de estos principios; pero no debo extenderme demasiado, principalmente cuando es seguro que vendrá la ocasión de sostenerlos ante quien tiene la facultad de explicar el sentido de la Constitución.

Concluyo, pues, fijando, como voto particular mío, las siguientes proposiciones:

Primera: no es competente el gran jurado de sentencia para explicar el sentido de la Constitución.

Segunda: en la causa seguida a don Antonio Gómez Cuervo, el deber del jurado de sentencia es consignar el hecho notorio de que no hay ley que imponga pena para el delito de que es culpable, y declarar que, en virtud de ese hecho, es imposible pronunciar sentencia.

México, agosto 28 de 1868.

*León Guzmán*